

Pese a la muerte de los niños embera, es poco el cambio en el Chocó.

El lamento de un pueblo enfermo

Riosucio (Chocó) es un municipio abandonado. Las remisiones de pacientes se dilatan, los equipos no funcionan, las drogas no llegan, y el único médico del pueblo la pasa en duerme vela. Después de seis meses, aún no se sienten las medidas tomadas por el Estado.

Juan Camilo Maldonado Tovar / Enviado especial, Riosucio.

Así se ve Riosucio (Chocó), un lunes de sol y sin escuela: las mujeres lavan la ropa sobre el río Atrato. Los niños corren por decenas como si viniera una redada. Las mujeres embarazadas salen de todos los rincones y caminan como equilibristas sobre las tablas de madera, instaladas tras la reciente inundación. Bajo ellas, enormes charcos de agua putrefacta, cargados de desechos, parecen hervir bajo el calor de medio día.

En una aséptica casa de madera que le sirve de centro médico, a orillas del río, el médico norteamericano Alan Wands ofrece un vaso de agua y se sienta a mi lado. En un pueblo sin agua potable, el gesto es una maravillosa cortesía. “La situación es muy grave”, afirma, mientras al fondo suenan los niños jugando entre el río. “Cada mañana 11.000 personas bajan al Atrato y defecan, luego se bañan, se lavan los dientes, destripan el pescado, lavan los trastes, limpian los botes. No es sorprendente que el 98 por ciento de los niños esté afectado”.

Como miembro de la Diócesis de Apartadó, el médico Alan Wands fue quien, a principios de este año, recolectó y denunció los casos de muerte por desnutrición de 32 niños indígenas en las cuencas del Atrato. Aunque algunas autoridades de salud salieron a rectificarlo y aún hoy sostienen que el número de fallecidos fue mucho menor, el médico sospecha que no sólo fue la mala alimentación lo que los mató, sino también el rotavirus, una bacteria cíclica que encontró a los niños con bajísimas defensas.

La escandalosa cifra, sumada a otros casos críticos en el Chocó, acaparó titulares en los noticieros y provocó una encendida reacción nacional que obligó al Gobierno a adoptar medidas urgentes. Juan Guillermo Ángel fue nombrado gerente presidencial para el Chocó, el ministro de Protección Social, Diego Palacios, aprobó el desembolso de \$35.0000 millones para fortalecer su sistema de salud y la Supersalud intervino la institución encargada de administrar los recursos para el medio millón de habitantes del departamento más pobre del país.

Hoy, seis meses después de la intervención estatal, que llegó acompañada de incontables denuncias de corrupción, El Espectador regresó al epicentro del escándalo periodístico y constató que en Riosucio persisten la desolación y la ineficacia. El primero en ratificarlo es el propio médico Alan Wands, quien acostumbrado a visitar a las comunidades afro e indígenas de la zona, reconoce que muchos niños siguen sin ser vacunados, la plata que llega desaparece, las EPS no remiten a tiempo sus pacientes y las medicinas y equipos médicos escasean.

“La reacción de Dasalud fue anafiláctica, es decir, una reacción de muerte causada por un medicamento”, afirma utilizando una sofisticada metáfora médica, y cuenta que aunque los procesos de vacunación han mejorado en ciertas zonas, la situación aún es muy precaria porque el problema trasciende lo alimentario. “Los brotes epidémicos vienen por ciclos y si no se cambian los sistemas de saneamiento o si no educamos a la gente para que crea en el suero oral, las muertes por el rotavirus y otras enfermedades diarreicas van a pasar una y otra vez”.

Memorial de agravios

De norte a sur, Riosucio es el tercer municipio del Chocó y está ubicado en la zona de Urabá, en las puertas de la serranía del Darién, a pocos kilómetros de la frontera con Panamá. Aunque desde principios de los años 90, la región fue zona de retaguardia de las Farc y corredor geográfico en las rutas del narcotráfico, los últimos estudios coinciden en reconocer que a partir

de 1997, el municipio y sus alrededores se convirtieron en epicentro de una guerra y descomposición social que aún prevalece.

Desde entonces, además de los críticos niveles de salud y saneamiento básico, educación y vivienda, medio ambiente e infraestructura estatal, la región de Riosucio y corregimientos anexos, ha sido un territorio azotado por las secuelas del conflicto armado. Y aunque la fuerza pública tiene presencia en la zona, no sólo se mantiene la presión de las Farc y de los grupos de autodefensa –pese a que estos últimos supuestamente se desmovilizaron desde 2006–, sino que la región es un epicentro de comunidades desplazadas, agredidas y despojadas de sus tierras ancestrales.

Por eso resulta difícil seguirle el paso a la lista de denuncias que detalla el personero municipal Darío Blandón Caicedo, quien sólo en los últimos 15 días, ha tramitado más de diez demandas contra el centro de salud de Riosucio. Y así lo especifica: “Aquí siguen muriendo niños y mujeres afrocolombianos e indígenas, muchos de ellos desplazados y a pesar de las denuncias y tutelas, no pasa nada y nadie responde”.

El memorial de agravios de Blandón es interminable. El centro médico Juan Bautista Luna, único en Riosucio, diariamente recibe reclamos por malos tratos, negligencia en las remisiones, médicos que renuncian y la pérdida de dineros para mejorar el salón de urgencias.

Blandón me presenta a Milton Velásquez, quien cuenta rabioso que fue víctima de un mal diagnóstico médico: “Insistieron que era una gripa, no quisieron remitirla a Turbo, hasta amenacé con volar el hospital y cuando la llevé a Medellín, le descubrieron un tumor en el ojo y lo perdió”.

El Centro de Salud recibe urgencias de los 16.000 habitantes del municipio. La opción esencial para casos graves es remitir los pacientes a Turbo (Antioquia). Lo mismo hacen con sus afiliados las EPS Cajacopi, Endisalud y Darién Limitada. Ese viaje en lancha dura cuatro horas. En panga (lancha) pública cuesta \$70.000 y en panga de urgencias un millón y medio. Sin embargo, al Centro Médico le robaron el motor de su única lancha de urgencias y las EPS no tienen pangas. De esta manera, quedan a merced de los procesos burocráticos que en Quibdó deben autorizar el envío de dinero para el pago del transporte.

Y aún más grave, las solicitudes duran semanas en aprobarse y, cuando se autorizan, los recursos llegan menguados y nadie reporta dónde se queda el dinero. Eso explica por qué en Riosucio abundan las historias de partos complicados en pangas, en la mitad del Atrato. Para colmo de males, cuando los pacientes logran llegar a Turbo o Quibdó, la mayoría de veces las EPS no han pagado sus deudas con los hospitales y se reactiva el drama.

“Aquí, hasta el hospital está enfermo”, reitera Frey Tuberquia, un campesino desplazado de la cuenca del Cacarica, quien admite que las más afectadas son las mujeres en embarazo, los niños y los neonatos. Según la organización Médicos Sin Fronteras, en lo que va corrido de 2007, más de un 30% de las remisiones de urgencias han sido por complicaciones de embarazo. Abundan historias dramáticas.

Por ejemplo, hace dos semanas, una mujer embarazada entró en crisis. La IPS Servicsalud y la EPS Cajacopi tenían que remitirla para una ecografía en Turbo, pero el dinero nunca llegó. Sin una sola ecografía, la mujer dio a luz un bebé con malformación, de dos cabezas, que murió en el traumático parto. En vez de que la inasistencia médica generara indignación, la foto de su bebé, tomada con un celular, se convirtió en novedad del pueblo y fue pegada en una farmacia, como lo comentó su dueña, “para que Riosucio sepa que esa señora tiene problemas genéticos”.

“No podemos hacer nada”

El Centro de Salud Juan Bautista Luna parece estar a punto de ser demolido. Caminando por sus corredores vacíos, veo cuartos con máquinas corroidas, escombros de madera, ventanales rotos y un solitario televisor sobre la sala de espera que todo el día transmite novelas. Cuesta trabajo entablar conversación con alguna de las 15 enfermeras. La primera dice que no hablan

con periodistas porque “no valoran lo que ellas hacen”. En medio de un aire malsano por la descomposición de una culebra mapaná que cuelga electrocutada de los cables eléctricos, por fin una de ellas se desahoga:

“Aquí nos atacan y dicen que no servimos, pero sin recursos no podemos hacer nada”, responde con desaliento y luego señala una vaca negra de cornamenta afilada que pasa a escasa distancia de algunos enfermos que esperan frente al Centro. “Mire cómo estamos”, enfatiza, “así es todo en este pueblo”. Y ciertamente el desaliento se advierte. Los maestros de escuela sólo buscan que los trasladen a otros departamentos, la basura revolotea por las esquinas sin nadie que la recoja y dos canchas de fútbol son la única entretención de decenas de jóvenes y niños. A falta de más sana entretención, no sorprende el numeroso caso de embarazos a temprana edad y la cantidad de niños que tiene cada madre. “Acá para divertirnos, no nos queda de otra que irnos para una residencia”, me dijo una mujer. De una u otra manera, estas situaciones contribuyen a la gravísima situación de salud pública.

Se afirma en el pueblo que los medicamentos eran desviados a los paramilitares. Hoy se tiene certeza de que si no siguen el mismo curso, tampoco llegan. No hay gasa, ni reactivos básicos de laboratorio ni insumos odontológicos. “¿Quién administra este Centro?”, pregunto desconcertado. “El médico”, responde otra enfermera y añade: “Vaya sáquelo de la consulta. Con seguridad le vendrá bien el respiro”. Y finalmente conozco al médico Melanio Pérez, quien llegó hace tres meses a Riosucio, tras el escándalo de los niños muertos.

Lo invitó un colega, quien apenas lo vio llegar al pueblo, agarró sus maletas y se trasladó al Valle del Cauca, a un mejor puesto. Desde entonces, el doctor Melanio Pérez es el único médico de urgencias, trabaja 24 horas al día, siete días a la semana, atiende 40 consultas diarias y 15 partos mensuales, duerme en uno de los cuartos del hospital, compartiendo cuarto con el portero y en tres meses no ha visto el primer cheque. Con rictus quebrado, mirada aturdida, la voz vencida y los gestos con que pareciera estar saboreando agua de charco, describe su desesperada situación personal.

“Uno anda con rabia con todo lo de este hospital”, confiesa desganado, mientras atiende a una fila de riosuceños alicaídos. “Uno entra a las habitaciones y se apagan los interruptores, a la sala de parto y se daña el sistema eléctrico. No hay otoscopio, todo está viejo, ni el ecógrafo ni el equipo de radiología ni la incubadora funcionan. A veces me deprimó. Mi vida sería más feliz si hubiera más personal, si tuviera un amigo u otro colega con quien compartir los casos difíciles”. ¿Y la administración del centro?, le pregunto. Pérez responde con aterrador pragmatismo: “Con el estrés que cargo, no tengo tiempo de andar pensando en eso”.

Todo en Riosucio es así. Se cambia de alcalde y de médicos como si fueran canales de televisión. Tras la suspensión del mandatario electo Lorenzo Pacheco Mena por parte de la Procuraduría, a comienzos de este año, cuatro alcaldes más han pasado por la administración. Lo mismo acontece con los médicos. El desfile de personal de salud es un carrusel.

Igual de grave es la situación de salubridad. El médico Pérez lo ratifica: “En cuanto a los residuos peligrosos, no tenemos dónde botarlos. Pedimos un incinerador, pero no ha llegado”. Una enfermera ya me había confesado que habitualmente los entierran o los tiran en el basurero, pero cuando viene el río, el agua los levanta y los trae de regreso.

Con un solo médico en el hospital y otros dos en la IPS, sin panga propia, sin plata para gasolina, los funcionarios alegan que no hay cómo salir a realizar brigadas a las zonas rurales. Cuando se hacen, son rápidas, atienden demasiadas personas en poco tiempo y carecen de la continuidad que ciertos programas de vacunación requieren. Aunque algunas organizaciones internacionales tratan de ayudar, su aporte es restringido. “Le estamos dando una mano al Centro Médico, pero no podemos reemplazar al Estado”, señala April Baller, jefa de la misión de Médicos Sin Fronteras, que promueve en la región un programa de salud sexual y reproductiva.

El secretario de Gobierno de Riosucio, Lorenzo Pacheco, le endilga la responsabilidad a Dasalud y a las EPS porque, desde que estalló la crisis, son quienes reciben los recursos de la Superintendencia. Y se defiende: “Nosotros no manejamos esos dineros. De vez en cuando

damos plata a los pacientes que no tienen para la remisión, pero no podemos hacer más”.

El retorno

La situación denunciada hace seis meses en Riosucio no ha cambiado un ápice. De regreso a Turbo, a bordo de una panga en la que, además del motorista, me acompañan cuatro mujeres embarazadas y una veintena de riosuceños, basta avanzar unos pocos minutos sobre el Atrato para que las aguas recuperen su color, el aire sea fresco y dé paso al verde exuberante del Darién. Son cuatro horas de viaje matizadas por un paisaje de desvencijados caseríos construidos de palustre hasta llegar a Turbo y después a Apartadó para tomar la avioneta desde la cual los cultivos de plátano parecen una interminable alfombra de un verde claro.

De vuelta a Bogotá, en su oficina en la Casa de Nariño, le pregunto a Juan Guillermo Ángel, gerente presidencial del Chocó, por qué no llegan los recursos a Riosucio, pese a su reciente intervención. Recostado hacia atrás en su asiento, responde con gesto de quien ya ha adivinado la pregunta. “Es que no hay dinero, está embargado en pleitos en los tribunales por pagos atrasados”. Y aduce que el problema es estructural, que la corrupción irriga las instituciones del departamento y que la ley no le permite al Gobierno intervenir de una manera más efectiva y completa.

Mientras contesta, entra una llamada a su celular. Paradójicamente es del Alto Baudó, le dicen que el alcalde no le ha pagado a los funcionarios y que éstos entrarán en paro. Ángel escucha, cuelga y suspira: “Ponerle orden a este despelote es de locos”. Seguramente, lejos, mientras el consejero presidencial reconoce su encrucijada, entre las calles fangosas de Riosucio, el doctor Melanio Pérez no tiene con qué atender a los pacientes víctimas de su amargura, en un centro médico que se desmorona, lentamente, mientras los niños se enjuagan la boca con el agua contaminada del río Atrato.

www.elespectador.com